

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 11º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-16707-2024
CARATULADO : FISCO DE CHILE/VILLARROEL

Santiago, diecinueve de junio de dos mil veinticinco.

Visto:

Que. compareció don **Marcelo Chandía Peña**, abogado procurador fiscal de Santiago, del Consejo de Defensa del Estado, en representación del **Fisco de Chile**, ambos domiciliados para estos efectos en Agustinas N°1225, piso 4, comuna de Santiago, quien dedujo demanda de indemnización de perjuicios fundado en sentencia penal condenatoria, en contra de **Juan José Villarroel Gil**, boliviano, RUN 7.515.478-K, médico cirujano, domiciliado en calle Quillay N°2.526 departamento 41 o departamento 61, comuna de Providencia, Santiago, con objeto de que se le condene a pagar al Fisco de Chile la suma de **\$240.323.760.-** (doscientos cuarenta millones trescientos veintitrés mil setecientos sesenta pesos) que corresponde al monto defraudado o aquel monto que resulte conforme con el mérito del proceso, de acuerdo con los argumentos de hecho y de derecho que señala, solicitando que el monto indicado se pague con el reajuste experimentado por el índice de precios al consumidor entre la fecha en que se cometió el delito y la del pago efectivo, o en subsidio, desde la fecha que se determine hasta el momento del pago del pago efectivo, que se condene al pago de los intereses corrientes sobre el monto defraudado devengado desde la constitución en mora y hasta su pago efectivo, y que se condene al demandado a pagar las costas de la causa.

Relató que en el mes de febrero de 2023 se inició una investigación penal a partir de una denuncia formulada por la Superintendencia de Seguridad Social, la cual remitió al Ministerio Público informes de auditorías internas elaborados por la Caja de Compensación Los Héroes. Dichos informes hacían referencia a prácticas irregulares detectadas en tres sociedades: Asesoría Seguridad SSP Chile Ltda., Seguridad Privada Express Security Ltda. y Transportes de Pasajeros y de Carga Verónica Ltda., en las cuales se constató una serie de factores comunes indicativos de fraude.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: YRZZXYXNUGD

Expuso que entre las irregularidades detectadas figuraban la emisión reiterada y continua de licencias médicas por parte de sus trabajadores, la existencia de altas y similares rentas imponibles, un elevado número de trabajadores con menos de seis meses de antigüedad laboral que accedían rápidamente a subsidios, vínculos de parentesco entre los empleados de las distintas sociedades, diagnósticos médicos repetidos y trabajadores que aparecían simultáneamente contratados por más de una de las empresas involucradas.

Precisó que la investigación fue tramitada ante el 11º Juzgado de Garantía de Santiago, bajo el RIT 296-2024, por los delitos de otorgamiento de licencias falsas, fraude de subvenciones y asociación ilícita. En este contexto, se acreditó la participación dolosa del demandado en la denominada variante “Fraude de Licencias Médicas FONASA”, vinculada a la organización delictiva liderada por Juan Jaime Quilodrán Neira, identificada como el “Clan Quilodrán”, quien, valiéndose de las tres sociedades antes referidas, orquestó un esquema de defraudación al Estado mediante el uso de licencias médicas ideológicamente falsas, causando un perjuicio fiscal superior a \$5.350.000.000 a noviembre de 2023.

Indicó que el 28 de noviembre de 2023, el Consejo de Defensa del Estado, en representación del Fisco de Chile, interpuso la respectiva querrela criminal, la que fue ampliada el 11 de abril de 2024 en contra del demandado Juan José Villarroel Gil, atribuyéndole participación en calidad de autor o partícipe de los delitos consumados de asociación ilícita (artículos 294 y 292 del Código Penal), emisión y obtención de licencias médicas fraudulentas (artículos 202 y 193 N°4 del Código Penal), y obtención fraudulenta de prestaciones fiscales (artículos 470 N°8 y 467 del mismo cuerpo legal), la que fue admitida a tramitación el 12 de abril de 2024.

Sostuvo que la investigación acreditó que Juan Quilodrán Neira, mediante las empresas de fachada, contrató a personas que no prestaban servicios, se les asignaban remuneraciones elevadas con el solo propósito de que cumplieran los requisitos mínimos para acceder a subsidios por incapacidad laboral, esto es, seis meses de afiliación en FONASA y tres



meses de cotizaciones previsionales. Cumplidas dichas condiciones, los falsos trabajadores solicitaban licencias médicas fraudulentas, previo pago a médicos que se prestaban para ello.

Afirmó que entre los facultativos reclutados por la organización delictual se encontraba el demandado Juan José Villarroel Gil, quien, entre el 27 de diciembre de 2022 y el 25 de mayo de 2023, emitió 119 licencias médicas fraudulentas, todas con diagnóstico de salud mental por 30 días, ocasionando un perjuicio directo a FONASA por la suma de \$240.323.760.- según lo consignado en el fallo penal dictado en su contra.

Resaltó que el mencionado fallo, dictado en procedimiento abreviado el 1 de agosto de 2024, describió la conducta del demandado dentro del grupo de médicos que, a sabiendas y de forma voluntaria, emitieron licencias sin realizar atenciones médicas, a cambio de montos de dinero variables según la duración del reposo prescrito, siendo esta práctica un elemento clave para el funcionamiento de la organización criminal.

Detalló que en la parte resolutive de la sentencia se condenó al demandado, junto a otros coimputados, por los delitos de otorgamiento de licencias falsas, fraude de subvenciones y asociación ilícita, imponiéndosele diversas penas privativas de libertad, accesorias e inhabilidades, además del pago de multas que ascendieron a 150 unidades tributarias mensuales en total. No obstante, se le concedió el beneficio de la libertad vigilada intensiva por un período de cinco años, debiendo someterse a las condiciones establecidas por Gendarmería de Chile y participar en un programa formativo de educación cívica.

Agregó que, de conformidad con lo resuelto, en caso de incumplimiento o revocación de la pena sustitutiva, el demandado deberá cumplir la totalidad de las penas privativas de libertad impuestas de forma efectiva, con abono de los días que permaneció privado de libertad desde el 28 de noviembre de 2023.

Concluyó que, conforme a lo establecido en la sentencia firme y ejecutoriada del 7 de agosto de 2024, el demandado tuvo un rol activo y determinante en el esquema de defraudación al Fisco, prestando su calidad profesional para facilitar la comisión de los ilícitos, motivo por el cual se le



atribuye responsabilidad directa por el perjuicio causado al patrimonio fiscal, el cual asciende a la suma de \$240.323.760.-

En cuanto al derecho, argumentó que, tratándose de un perjuicio fiscal derivado de la comisión de ilícitos penales, y habiéndose ejercido la acción penal correspondiente, resultaba plenamente procedente promover la acción civil de indemnización conforme a las disposiciones de la legislación civil y procesal penal. En ese contexto, se invocó el procedimiento abreviado tramitado en sede penal como antecedente habilitante para esta acción resarcitoria.

Sostuvo que los hechos acreditados en la causa penal configuran no sólo ilícitos penales, sino también hechos generadores de responsabilidad civil, toda vez que existe una relación de causalidad directa entre las infracciones cometidas y el daño causado al Fisco. Tal circunstancia permite fundar la presente demanda en los artículos 1437, 2314 y siguientes del Código Civil, los cuales consagran la obligación de reparar íntegramente los daños inferidos por acto ilícito.

Precisó que en la especie concurría lo dispuesto en el artículo 178 del Código de Procedimiento Civil, que autoriza a las partes a invocar una sentencia penal condenatoria como medio de prueba en juicio civil, y que, en conformidad con el artículo 180 del mismo cuerpo legal, dicha sentencia hace cosa juzgada en esta sede, impidiendo alegaciones o pruebas incompatibles con lo resuelto en el proceso penal ni con los hechos que lo fundamentaron.

Indicó que en el juicio penal seguido contra el demandado se garantizó la debida bilateralidad de la audiencia, resguardando todos sus derechos procesales, sin que la defensa interpusiera recurso alguno contra la sentencia condenatoria, lo que permitió que ésta adquiriera firmeza.

Afirmó que dicho fallo cumplió con todas las exigencias del artículo 36 del Código Procesal Penal, y que incluso, el demandado realizó un reconocimiento expreso de los hechos de la acusación, lo cual debe estimarse como confesión extrajudicial en los términos del artículo 398 inciso segundo del Código de Procedimiento Civil.

Recalcó que este reconocimiento constituye también una renuncia expresa a una eventual alegación de prescripción de la acción civil, pues



implicó la aceptación íntegra de los hechos y de la participación en los delitos, lo que robustece aún más la procedencia de la demanda de indemnización intentada.

Añadió que, conforme a lo establecido en el artículo 2314 del Código Civil, quien comete un delito que causa daño a otro tiene la obligación de indemnizar, sin perjuicio de las penas que le correspondan. Complementó dicha afirmación con el artículo 2329 del mismo cuerpo legal, el cual dispone que todo daño atribuible a malicia o negligencia debe ser reparado íntegramente, comprendiendo tanto el daño emergente como la desvalorización monetaria e intereses moratorios.

Resaltó que el artículo 24 del Código Penal dispone que toda sentencia condenatoria en materia criminal lleva implícita la condena al pago de costas, daños y perjuicios por parte de los responsables legales, entre ellos autores, cómplices o encubridores, lo cual resulta plenamente aplicable al caso de autos.

Finalmente, invocó el artículo 3° N°9 del Decreto con Fuerza de Ley N°1 de 1993 del Ministerio de Hacienda, que faculta al Consejo de Defensa del Estado para ejercer la acción civil derivada de los delitos en que haya intervenido como parte en la acción penal, cuando ello sea conveniente al interés del Fisco, como sucede en la especie.

El 20 de enero de 2025 se celebró **audiencia de estilo**, con la comparecencia de don Diego Orozco Cáceres, en representación de la parte demandante, Fisco de Chile, y en rebeldía de la parte demandada, Juan José Villarroel Gil.

Se efectuó una breve relación de la demanda, la cual fue ratificada en todas sus partes por la parte demandante.

Se tuvo por contestada la demanda en rebeldía de la parte demandada.

Llamadas las partes a conciliación, esta no se verificó debido a la referida rebeldía.

A continuación, **se recibió la causa a prueba**, fijándose como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos los siguientes:

1. Efectividad de haberse dictado una sentencia condenatoria en procedimiento abreviado por el 11° Juzgado de Garantía de Santiago en la



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: YRZZXYXNUGD

causa RIT O 296-2024, en virtud de la cual, se condenó al demandado en calidad de autor por los delitos de otorgamiento de licencias falsas previsto y sancionado en el artículo 202 del Código Penal; fraude de subvenciones del artículo 470 N°8 del Código Penal; y por el delito de asociación ilícita del artículo 294 en relación al artículo 292 del Código Penal, calidad todos en grados de desarrollo consumados desde los años 2020 a 2023. Hechos establecidos en la sentencia y penas determinadas o penas establecidas.

2. Origen, naturaleza y monto de los perjuicios ocasionados con ocasión de los ilícitos establecidos en la sentencia señalada en el punto anterior.

3. Relación de causalidad entre los perjuicios ocasionados y los hechos establecidos en la sentencia penal.

Mediante resolución de **2 de junio de 2025**, se citó a las partes a oír sentencia.

Considerando:

Primero: Que compareció don **Marcelo Chandía Peña**, Abogado Procurado Fiscal, en representación de Consejo de Defensa del Estado, y este último a su vez, en representación del **Fisco de Chile**, quien dedujo demanda de indemnización de perjuicios por sentencia penal condenatoria, en contra de **Juan José Villarroel Gil**, a fin de que el demandado sea condenado a pagar la cantidad de **\$240.323.760**, más reajustes calculado por el índice de precios al consumidor entre la fecha en que se cometió el delito y la del pago efectivo, e intereses corrientes y costas.

Fundó su demanda de indemnización de perjuicios en los antecedentes de hecho y de derecho expuestos en la parte expositiva de esta sentencia.

Segundo: Que se tuvo por contestada la demanda en rebeldía de la demandada.

Tercero: Que la carga de la prueba puede ser definida como la necesidad de las partes de probar los hechos que constituyen el supuesto fáctico de la norma jurídica que invocan a su favor a riesgo de obtener una resolución desfavorable a sus pretensiones y resistencias. Conforme a lo anterior, el ordenamiento positivo nacional regula el *onus probandi* en el



artículo 1698 del Código Civil, al señalar que “Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o ésta”.

Cuarto: Que, en estos autos, la disposición del artículo 680 N°10 del Código de Procedimiento Civil, dispone:

Art. 680. El procedimiento de que trata este Título se aplicará en efecto de otra regla especial a los casos en que la acción deducida requiera, por su naturaleza, tramitación rápida para que sea eficaz (...) 10° A los juicios en que se deduzcan acciones civiles derivadas de un delito o cuasidelito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 del Código Procesal Penal y siempre que exista sentencia penal condenatoria ejecutoriada”.

A su vez, el artículo 178 del mismo cuerpo legal, refiere que “*En los juicios civiles podrán hacerse valer las sentencias dictadas en un proceso criminal siempre que condenen al procesado*”.

Quinto: Que, analizadas las normas antes transcritas, hay que poner de relieve que el actor, al contar con una sentencia penal condenatoria, se encuentra legitimado para demandar en sede civil los perjuicios que reclama, lo que exige también, *a priori*, el determinar la existencia, alcances y estado de la sentencia penal a la que alude.

Sexto: Que la actora, haciéndose cargo de lo antes expuesto, acompañó como medio de confirmación procesal los siguientes instrumentos:

1. Sentencia penal condenatoria dictada en procedimiento abreviado, seguido ante el 11° Juzgado de Garantía de Santiago, en causa RIT 296-2024, en aquella se condenó como autores de los delitos consumados de asociación ilícita, obtención fraudulenta de subvención del Estado y emisión de licencia médica falsa, cometidos entre los años 2020 y 2023, por Stefany Andreina Romero Hernández, Jairo Segundo Perdomo Chica, Juan José Villarroel Gil y Yealfred Emiliano Espinoza Almeida.

El tribunal penal tuvo por acreditado que los imputados formaban parte de una organización criminal compuesta por más de veinte personas, con una estructura jerárquica y permanente en el tiempo, destinada a defraudar al Estado mediante la obtención de licencias médicas falsas, con diagnósticos de salud mental. Estas eran otorgadas por médicos que no



realizaban atención médica y, en contrapartida, recibían un pago según la cantidad de días consignados en las respectivas licencias médicas emitidas. Luego, los trabajadores ficticios cobraban el subsidio pagado por FONASA a través de la Caja de Compensación Los Héroes y devolvían dichos fondos a la organización, sea en efectivo o mediante transferencias, constituyendo así el perjuicio económico.

Dentro del listado de médicos emisores de licencias falsas, el tribunal destacó a los siguientes imputados:

1. Stefany Andreina Romero Hernández, quien entre el 20 de septiembre de 2021 y el 6 de diciembre de 2022 emitió 280 licencias falsas por un total de \$377.487.603.-

2. Yealfred Emiliano Espinoza Almeida, quien entre el 9 de marzo y el 30 de agosto de 2022 emitió 130 licencias falsas por \$176.410.177.-

3. Juan José Villarroel Gil, quien entre el 27 de diciembre de 2022 y el 25 de mayo de 2023 emitió 119 licencias falsas por \$240.323.760.-

4. Jairo Segundo Perdomo Chica, quien entre el 9 de junio de 2021 y el 6 de diciembre de 2022 emitió 82 licencias falsas por \$158.558.251.-

El perjuicio total causado al Estado, hasta noviembre de 2023, fue estimado en la suma de \$5.350.000.000.-

En la cavilación respectiva de la sentencia, el juzgador penal estableció que los imputados reconocieron responsabilidad en los hechos determinados por el Ministerio Público, conforme al procedimiento regulado en el artículo 406 y siguientes del Código Procesal Penal. Luego, en lo resolutivo, se dispuso:

“1.- Que, se condena a Jairo Segundo Perdomo Chica, Juan José Villarroel Gil, Stefany Andreina Romero Hernandez y Yealfred Emiliano Espinoza Almeida, por su responsabilidad en calidad de autor, de los delitos de otorgamiento de licencias falsas previsto y sancionado en el artículo 202 del Código Penal, por el ilícito de fraude de subvenciones del artículo 470 N°8 del Código Penal y por el delito de asociación ilícita del artículo 294 en relación al artículo 292 del Código Penal, todos en grado de desarrollo consumado, ocurridos en territorio jurisdiccional de este Juzgado de Garantía desde el año 2020 al año 2023; a sufrir por el primer delito la pena de SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO DÍAS DE PRESIDIO MENOR EN SU



GRADO MEDIO, a la accesoria de suspensión para cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, INHABILITACIÓN PARA EMITIR LICENCIAS MÉDICAS durante el tiempo de la condena, y multa de CINCUENTA UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES, por el segundo ilícito la pena de TRES AÑOS Y UN DÍA DE PRESIDIO MENOR EN SU GRADO MAXIMO, accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos e inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, y multa de CIEN UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES, y finalmente por el tercer ilícito a la pena de SESENTA Y UN DÍA DE PRESIDIO MENOR EN SU GRADO MINIMO, a la accesoria de suspensión para cargo u oficio público durante el tiempo de la condena”.

2. Certificado de ejecutoria de sentencia de 1 de agosto de 2024, RUC N°2300210877-1, RIT N°296-2024.

Séptimo: Que, en razón de lo antes expuesto, ha de encontrarse acreditada en esta sede, la existencia de la sentencia condenatoria penal ejecutoriada que la habilitaría para ejercer la presente acción civil que busca reclamar perjuicios patrimoniales. Dicha sentencia produce efectos de prejudicialidad y para lo que interesa, los hechos delictivos establecidos en la misma, son inamovibles para este sentenciador, por efecto de la autoridad cosa juzgada de la que goza.

Octavo: Que, para poder dictar sentencia inmediata en el contexto de un procedimiento simplificado, a partir de lo dispuesto en la norma del artículo 406 del Código de Procesal Penal, debe el imputado, en conocimiento de los hechos materia de la acusación y de los antecedentes de la investigación que la fundaren, los acepte expresamente y manifieste su conformidad con la aplicación de este procedimiento, lo que en la especie ocurrió y motivó la imposición de la pena privativa de libertad bajo la modalidad de pena sustitutiva de libertad vigilada incentiva, por el lapso de cinco años.

A partir de ello, y con el mérito de la prueba aportada, dicha sentencia ha de ser juzgada en esta sede como una confesión extrajudicial según el artículo 398 del Código de Procedimiento Civil.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: YRZZXYXNUGD

Señala la norma en mención: *“La confesión extrajudicial es sólo base de presunción judicial, y no se tomará en cuenta, si es puramente verbal, sino en los casos en que sería admisible la prueba de testigos.*

La confesión extrajudicial que se haya presentado a presencia de la parte que l invoca, o ante el juez incompetente, pero que ejerza jurisdicción, se estimará siempre, como presunción grave para acreditar los hechos confesados. La misma regla se aplicará a la confesión prestada en otro juicio diverso; pero si éste se haya seguido entre las mismas partes que actualmente litigan, podrá dársele el mérito de prueba completa, habiendo motivos poderosos para estimarlo así”.

Luego, el artículo 427 del mismo cuerpo legal, sigue la misma lógica en cuanto existirá a favor de los hechos declarados verdaderos en otro juicio entre las mismas partes.

Noveno: Que, de lo antes expuesto, aparece claro que los efectos de la sentencia penal obedecen a una hipótesis de confesión prestada en juicio diverso. En consecuencia, cabe reiterar que el demandado prestó su reconocimiento expreso respecto de su responsabilidad en los hechos que constituyen los delitos de emisión de licencias médicas falsas, obtención fraudulenta de subvención del Estado y asociación ilícita, todos en grado de consumado. Tal aceptación fue formulada en el marco del procedimiento abreviado tramitado ante el 11° Juzgado de Garantía de Santiago, conforme a lo dispuesto en el artículo 406 del Código Procesal Penal, lo que equivale, para estos efectos, a una confesión extrajudicial válida y eficaz, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 398 del Código de Procedimiento Civil.

Es evidente que el fallo penal consignó, como elemento esencial del tipo sancionado, la disposición patrimonial del Fisco de Chile, en cuanto entidad que sufragó los subsidios por incapacidad laboral derivados de las licencias fraudulentas. En este punto, resulta relevante destacar que el perjuicio económico acreditado en sede penal, ascendió a **\$240.323.760**, cantidad que se vincula directamente con las 119 licencias emitidas por el demandado, sin atención médica y con diagnóstico falso, lo que da cuenta de un daño directo al patrimonio fiscal.

En otras palabras, existe plena identidad entre los perjuicios ocasionados por los ilícitos acreditados en la sentencia penal y los



reclamados en la presente acción civil, motivo por el cual, a partir de los hechos establecidos en dicha sentencia ejecutoriada, resulta acreditado que se produjo un perjuicio patrimonial al demandante de autos, Fisco de Chile, por la suma ya indicada, cuyo resarcimiento se persigue en esta sede.

Décimo: Que la responsabilidad es uno de los principios fundamentales del Derecho en general y del Derecho Civil en particular. En términos generales, se genera la responsabilidad con ocasión de la infracción a una norma, entendiendo por ésta todo precepto jurídico, sea de rango constitucional, legal o reglamentario.

Ahora bien, el presupuesto de la responsabilidad se encuentra en el daño, o dicho de otra forma, en el incumplimiento de un deber que causa daño. Sin daño, no hay responsabilidad civil. El daño es condición esencial de la responsabilidad patrimonial.

Como bien apunta el profesor Orrego, nuestro Código Civil adopta como fundamento de la responsabilidad delictual o cuasidelictual, la denominada “doctrina clásica”. Para esta doctrina, el fundamento de la responsabilidad extracontractual está en la culpa del autor, entendida, en términos amplios, como aquella comprensiva tanto de culpa propiamente tal como de dolo. La responsabilidad requiere que el daño sea imputable. No basta sólo con el daño, pues éste podría no ser atribuible a la conducta de un sujeto, o aún en tal caso, podría ocurrir que dicha conducta no haya sido culpable. Por ende, si hay culpabilidad, hay responsabilidad. Se trata de una responsabilidad subjetiva. Diversas disposiciones en el Código Civil confirman que en esta materia se sigue la doctrina clásica: artículos 2284, 2319, 2323, 2329, 2333.

En cuanto a los elementos de la responsabilidad extracontractual, son cuatro los elementos que configuran un hecho ilícito, delictual o cuasidelictual, a saber: **1.** La existencia de un daño; **2.** Un daño imputable: la culpa o dolo; **3.** La relación de causalidad entre el dolo, la culpa y el daño; y **4.** Capacidad delictual.

Undécimo: Que, en lo relativo al daño, entendido como todo menoscabo que experimente una persona en sus bienes o derechos, y que se traduzca en la pérdida de un beneficio de índole patrimonial o extrapatrimonial, resulta evidente que la sentencia penal ejecutoriada lo tuvo



por establecido y para esta sede es inamovible, desde que determinó que el perjuicio directo ocasionado al Fisco de Chile, con motivo de la emisión de 119 licencias médicas falsas por parte del demandado, ascendió a la suma de \$240.323.760.-, monto que coincide con el que se persigue en la presente acción indemnizatoria. No podemos perder de vista que formó parte del tipo penal sancionado, el monto de defraudación ocasionado por el demandado en el patrimonio fiscal por el pago de subsidios fraudulentos.

En cuanto a la imputabilidad en lo referido a la existencia de dolo o culpa, dicho elemento se encuentra plenamente acreditado, toda vez que la condena penal impuesta al demandado supone la constatación de una conducta típica, antijurídica y dolosa, manifestada en su participación consciente y voluntaria en la estructura delictiva destinada a defraudar al Estado, configurándose así, el elemento subjetivo exigido por el artículo 2314 del Código Civil.

Respecto de la relación de causalidad entre el dolo y el daño, no basta con la sola concurrencia de ambos elementos de manera aislada. Es necesario que entre ellos medie un vínculo de causalidad adecuado, en virtud del cual el dolo haya sido causa directa y necesaria del daño producido.

En la especie, tal vínculo se encuentra claramente acreditado en la sentencia penal, la cual establece que las licencias falsas emitidas por el demandado fueron el instrumento a través del cual se obtuvo indebidamente el pago de subsidios por parte de FONASA, generando el perjuicio fiscal ya cuantificado.

En efecto, fue precisamente la actuación dolosa del demandado, consistente en la emisión sistemática de licencias médicas sin atenciones médicas algunas, lo que permitió la disposición patrimonial por parte del Estado y, en definitiva, la concreción del daño, por lo que el nexo causal entre el actuar ilícito y el perjuicio económico se presenta de forma evidente a partir de los hechos asentados en sede penal.

Por último, en cuanto a la capacidad delictual del demandado, entendida como el discernimiento necesario para ser sujeto de responsabilidad, es claro que el mismo no se encuentra comprendido en ninguna de las hipótesis de inimputabilidad del artículo 2319 del Código



Civil, razón por la cual debe estimarse plenamente capaz para responder civilmente por los daños provocados con su actuar doloso.

Duodécimo: Que, en consecuencia, dándose cumplimiento a todos los presupuestos legales que hacen procedente la responsabilidad aquiliana derivada del hecho ilícito por el cual el demandado fue condenado en sede penal y habiéndose establecido en la misma sentencia el monto de la defraudación por la que fue condenado, la que asciende a **\$240.323.760**, es que será condenado al pago de dicha suma, por la responsabilidad que le asiste en los perjuicios causados al actor, con ocasión de los ilícitos perpetrados.

Décimo tercero: Que la suma ordenada pagar en el motivo anterior, se reajustará conforme a la variación del índice de precios al consumidor por el periodo que media entre el mes anterior al de la notificación de la demanda y el mes anterior al del pago efectivo.

En cuanto a los intereses demandados, estos corresponden a los corrientes para operaciones reajustables, los que se devengarán desde la fecha de notificación de la demanda hasta la del pago efectivo, de conformidad a lo dispuesto en artículo 1551 N°3, en relación con el artículo 1557 del Código Civil.

Décimo cuarto: Que, por haber resultado completamente vencido el demandado, quien se mantuvo rebelde durante gran parte del proceso, lo que impide estimar que “ha litigado” con motivo plausible, será condenado al pago de las costas.

Por estas consideraciones, normas legales citadas y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1698, 2314 y siguientes del Código Civil; artículos 144,160, 398, 437, 680 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, **se decide:**

I. Que, **se acoge** la demanda de indemnización de perjuicios deducida el **Fisco de Chile**, representado por el Consejo de Defensa del Estado, en contra de **Juan José Villarroel Gil** y, en consecuencia, se le condena a pagar a favor de la demandante la suma de **\$240.323.760** (doscientos cuarenta millones trescientos veintitrés mil setecientos sesenta pesos), más intereses y reajustes, conforme lo razonado en la cavilación décima tercera.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: YRZZXYXNUGD

II. Que, **se condena** a la parte demandada al pago de las costas del juicio.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°C-16.707-2024.

Pronunciada por don **Patricio Hernández Jara**, Juez Titular del Undécimo Juzgado Civil de Santiago.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, diecinueve de junio de dos mil veinticinco.**



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: YRZZXYXNUGD